

## TRANSICION A LA DEMOCRACIA: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS\*

JUAN DE DIOS CARMONA

Hablar de transición en materia política merece una aclaración previa.

Si tomamos el concepto en su sentido natural y obvio de “acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”, vemos que él representa un cambio que puede servir para mejorar o para empeorar una situación. Sin embargo, en el lenguaje político contemporáneo se ha dado especialmente a la expresión “transición a la democracia” el sentido de imaginarse siempre un cuadro de mejoramiento en el régimen político de los pueblos.

Tomado en este último aspecto, empiezo por decir que me agrada hablar de la transición a la democracia. El objetivo de alcanzar este régimen y que debiera unir en estos instantes a la inmensa mayoría de los chilenos, señala a la democracia como algo que merece ser logrado y, por ende, defendido en todo momento y lugar. Debemos tenerlo muy presente en la etapa que estamos viviendo en Chile.

Desgraciadamente, el soviétismo tiene la facultad de apoderarse de algunas palabras que estima símbolos y darles extrañas fuerzas en su beneficio, aunque haya conciencia de su irrealidad. El leninismo inventó aquello del eterno estado de “transición al comunismo” de la sociedad soviética, lo que hace que el comunismo —régimen jamás alcanzado— constituya siempre una esperanza.

El apoderamiento, por otra parte, de la palabra “democracia” para atribuirle a las situaciones de dictadura de los países satélites del imperialismo soviético —“las democracias populares”— pretende un doble fin: impedir que sean juzgadas como dictaduras, por una parte; y que lo malo que tienen se atribuya a los restos del régimen burgués que conservan, por la otra. Así la idea de “tránsito al socialismo” que también se agrega a dichos estadios, implica la imagen de paso a un sistema de libertad superior que se va desprendiendo de la rémora del régimen decadente de falsas libertades ideado por la burguesía.

No otra cosa hizo Salvador Allende cuando proclamó “la vía chilena al socialismo”, utilizando la democracia nuestra para llevarnos de la mano al totalitarismo marxista en nombre de la libertad y de la justicia.

Se ha instalado, así, mediante la palabra “transición”, una trampa intelectual que por eso mismo caza fácilmente a los que se definen como intelectuales progresistas de Occidente. Por ella, el comunismo soviético pretende ser juzgado sólo por

\* Conferencia dictada el día 16 de Agosto de 1983 en la sede del Instituto de Ciencia Política.

sus declaraciones, jamás por sus actos y por sus resultados. Por ella igualmente — como dice Jean-François Revel— los socialistas marxistas pueden sentenciar que en los procesos de transición que ellos encabezan, los errores del capitalismo son del capitalismo y los que comete el socialismo son también del capitalismo.

Solzhenitsyn, a quien Occidente siempre debiera escuchar, nos previene: “La humanidad actúa como si no entendiera lo que es el comunismo, y no quiere entender, no es capaz de entender”.

Hay, pues, transición y transición.

Lo que nos preocupa esta vez es la transición de un régimen de tipo autoritario a la democracia, que es nuestro caso. ¿Cómo obtenerlo?

Planteada la pregunta para situaciones generales, el problema es considerado difícilísimo. La ágil pluma de Manuel Blanco Torio, articulista de ABC de Madrid nos dice, al referirse a este punto, que recordaba un apólogo de origen chino, según el cual es fácil cabalgar un tigre; lo difícil es bajarse de él.

“Pues lo mismo ocurre con las dictaduras —nos dice— con tal que no sean comunistas. Bajar del tigre, es decir, salir de una dictadura para ensayar una democracia es difícilísimo. Hay países que vienen intentándolo periódicamente desde hace más de un siglo y al final se los come el tigre. La excepción son las dictaduras comunistas, porque éstas se comen al tigre”.

Afortunadamente para Chile —podemos acotar nosotros —aprendimos a bajarnos del tigre de la dictadura comunista; pero no hemos tenido la capacidad para comerlo y esa circunstancia es un problema que tenemos que enfrentar en el período de transición a que hemos entrado.

El Gobierno ha dado un paso muy positivo para hacer posible la transición a la democracia y ha expresado su voluntad de que puedan despacharse las leyes que son la base para un pleno ejercicio democrático.

I. Ante este hecho, el primer asunto que podemos proponer es la actitud para recibirlo. Existe a nuestro juicio la NECESIDAD —entiéndase bien— la NECESIDAD de agotar hasta las más remotas posibilidades de solución pacífica para producir el consenso indispensable para el diálogo.

El escritor y filósofo español Julián Marias recordaba en 1978, ante cómo se estaba desarrollando el proceso español de democratización, que él había señalado diez años antes que “no hay cosa que contribuya tanto a perpetuar las cosas como la prisa, sobre todo la prisa verbal”.

Hay que medir con una regla muy precisa el precio que hay que pagar para dar una respuesta adecuada ante una situación, por muy apremiante que subjetivamen-

te parezca y *aunque objetivamente lo sea*. Debe considerarse, antes que nada, que una normalización no puede obtenerse proponiendo medidas anormales. Los últimos acontecimientos chilenos, muy dolorosos, ponen en evidencia este punto de partida que nos parece esencial.

Si se manifiesta el propósito del diálogo, no se puede responder al llamado con decisiones rupturistas que son, como su nombre lo indica, anormales, y pueden ser la justificación de actuaciones anormales. El precedente puede ser funesto. Si se actúa anormalmente una vez, ¿por qué no pueden haber otras siguientes, incluso en contra de los que cometieron la primera anomalía, encontrando su justificación en la necesidad de apresurar el proceso?

La impaciencia democrática no puede servir para incitar a los enemigos de la democracia a que la destruyan antes de que ella pueda realizarse plenamente, valiéndose de esa impaciencia. Hay tácticas que producen un resultado totalmente contrario a lo que uno, de muy buena fe, quiere obtener.

Los casos de Nicaragua y de El Salvador, para citar sólo los correspondientes a América Latina, revelan con nitidez lo que ocurre cuando se recurre a la prisa, a la intransigencia ideológica y a los actos de anomalía institucional y se repudia el diálogo. Uno ha caído totalmente dentro de la órbita del imperialismo soviético y el otro, conducido en el primer tiempo en forma exclusivista, ha terminado en un verdadero caos, en el terrorismo y la guerrilla. ¿Es esto lo que se pretende para nosotros?

Basta, en cambio, una rápida ojeada a lo que ha sucedido y está sucediendo en nuestra América para comprender que los procesos de vuelta al régimen democrático se han podido verificar por la decisión de los propios gobiernos militares de llevarlo adelante y con la voluntad de las fuerzas democráticas de ir a un entendimiento básico del proceso fijado por esos gobiernos, cooperando, de esa manera, a su realización. Así ha sucedido en Ecuador, Perú y en parte en Bolivia y está sucediendo en Brasil y Argentina, para citar casos que están produciendo *resultados prácticos*.

Es digno de anotar lo sucedido en Perú. Durante más de 45 años lucharon como enemigos irreconciliables, creando un verdadero conflicto histórico, el partido llamado APRA y las Fuerzas Armadas. El resultado estuvo a la vista. Jamás pudo APRA alcanzar sus objetivos políticos. Sólo cuando su líder estuvo en el ocaso de su vida se pudo obtener el entendimiento tomando en cuenta los intereses superiores de la nación, antes que los simplemente partidistas. Con ello se permitió el encauzamiento democrático del Perú. ¿Qué ventaja obtuvo el pueblo peruano de esta obcecación?

Es clarificador plantear las cosas hasta sus últimas consecuencias. La afirmación de no entrar a dialogar y de rechazar a un régimen lleva a la conclusión de tener que luchar por su derrocamiento, es decir, el reemplazo del gobierno por otro recurriendo a la anormalidad institucional. No se puede hacer malabarismos con las palabras y distinguir a este respecto entre derrocamiento y reemplazo. En el caso de Chile significaría, además, el cambio de las propias instituciones armadas. Fuera de que tal política podría llevar a sus sostenedores o al país a un desastre, es necesario advertir que ella los lleva, por la fuerza de las cosas, a entregarse en los brazos de los elementos más extremos del marxismo, por muy minoritarios que éstos sean. Hay una ley ineludible a ese respecto.

El caso de España, que algunos tienen también a flor de labios, es muy decididor. La institucionalización democrática partió del régimen imperante, con el entendimiento y sometimiento al proceso de los hombres de la oposición. ¡En un país que tuvo una guerra civil con más de un millón de muertos! Pero es que allí los más recalcitrantes republicanos tuvieron la apertura, el tipo y la madurez de aceptar el consenso dentro de una Constitución monárquica.

La transición requiere de la apertura y del diálogo, renunciando a las posiciones intransigentes y a los apresuramientos infantiles. No se puede desahuciar *a priori* un diálogo o transformar éste en un diálogo de sordos. Ya en 1979 se planteó la posibilidad del diálogo en Chile y en esa oportunidad se descalificó al Gobierno, no reconociéndole la facultad de conducir el proceso de la institucionalización democrática. El planteamiento opositor no ha variado desde esa fecha: se pretende una posición paralela anunciando una alternativa global que imposibilita todo punto de encuentro. La falta de lógica y lo contradictorio del planteamiento cae por su peso: lo señaló gráficamente don Domingo Durán hace pocos días, al decir que no se puede desahuciar el debate que se ofrece pidiéndole al interlocutor que desaparezca.

Es bueno recordar otra vez a Julián Marias: "No hay cosa que contribuya tanto a perpetuar las cosas como la prisa, sobre todo la prisa verbal".

2. El camino a la democracia en Chile pasa también por la necesidad de aclarar otro punto fundamental: la presión extranjera, cargada de influencias de ideólogos que pontifican desde fuera y conocen muy superficialmente la realidad del país, o de intereses políticos de partidos o dirigentes extranjeros para los que Chile ha pasado a ser un simple peón en su tablero de ajedrez. Hay, pues, que plantear necesariamente la idea de no permitir *la extranjerización de nuestra política*, de correr el peligro de hacer de Chile un nuevo foco de influencias mundiales y de constituirnos en algo parecido a lo que pasa en Centroamérica. En síntesis, hay que *rescatar nuestra soberanía* en la conducción de nuestro proceso político.

Se dice, para justificar la injerencia o más bien la intrusión en nuestros asuntos, que ello obedece a la enorme consideración que merece un país como Chile, debido a su ejemplar vida democrática de más de ciento cincuenta años y a su madurez cívica, por una parte y, por la otra, a la solidaridad que pueden darse el lujo de aducir los grandes para romper las viejas fórmulas de la no injerencia, que era la mejor defensa de las naciones débiles.

Si es por lo primero, diremos que ¡vaya la consideración que se nos otorga! Creemos que el mayor respeto que se nos puede tener es dejarnos, precisamente por nuestra tradición democrática, por nuestra madurez y por nuestra cultura política, manejar nuestros asuntos y nuestro proceso político. No cabe siquiera, en este caso, la aplicación del dicho que "más sabe loco en su casa que cuerdo en la ajena". Aquí, el cuerdo en ésta, su casa, tiene el derecho y el deber, a fin de salvarla para la causa de la libertad, de rechazar no digamos el consejo—que es siempre bien recibido cuando es bien intencionado— sino la intervención burda de quienes, mal o mañosamente informados, tratan de servir de esa manera sus propósitos de revancha, de dominio, o sus intereses partidistas o simplemente electorales.

Si es, en cambio, por la llamada solidaridad democrática, debemos ponderar debidamente lo que ello significa. Si se invoca esa solidaridad basándose en el respeto a los derechos humanos y como una obligación internacional, diremos que no hay temor en recogerla. El Artículo 5° de nuestra Constitución Política de 1980, que es tan ignorada por los que no quieren siquiera entrar a considerarla, dispone que "el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana". Pero si a pretexto del respeto a los derechos humanos se pretende tener derecho a inmiscuirse en nuestro proceso, indicándonos cómo debemos asumirlo y qué fuerzas son las que deben conducirlo y si no son ellas declarar la no credibilidad de nuestro objetivo democrático, debemos desde ya encender la luz roja de la peligrosidad de esta intromisión.

¡Cuidado! Que este planteamiento tiene una extraña similitud con la doctrina Brezhnev, de la soberanía limitada de los países, y de la que nos salvamos el 11 de septiembre de 1973. Brezhnev dio forma y legitimidad, al estilo socialista, a la intervención militar o política en los países que la Unión Soviética estima que están en el campo o el mundo socialista. Estos tienen la soberanía nacional limitada, porque por sobre ella existe "la soberanía socialista", basada curiosamente en *la solidaridad*.

A pretexto también de la solidaridad, se pretende imponer un tipo de democracia a imagen y semejanza de lo que desean los de fuera, fomentado por los focos de influencia o de gustos que tienen los diferentes clubes u organizaciones políticas internacionales que funcionan en el exterior, que desean auxiliar de esa manera a

sus similares corrientes doctrinarias que se han formado en nuestra América. Se trata así de, veladamente, patrocinar también una especie de soberanía limitada para nuestros países a través de algo que aparece aberrante y la negación de sí misma: *la democracia impuesta*.

Primero fue la exigencia de celebrar elecciones a prisa y a cualquier precio, como si las elecciones fueran la panacea que remediaría todos los males. El desencanto que se ha producido al comprobar que el país no era diferente al día siguiente de la elección en sus problemas vitales, puede significar el descrédito de la democracia en la mente de los pueblos, por la confusión que se ha hecho de que el camino de la democracia pasa irremediablemente, como paso previo, por una elección. Esto deberían tenerlo presente incluso los que tienen todas las ventajas de ganar la elección, por estar organizados, frente a los que no lo están.

Ha venido después toda la presión político-informativa que no nos permite evaluar debidamente nuestra propia realidad y nuestras propias conveniencias. Tratando el asunto en términos generales, es altamente preocupante la visión deformada que en Europa existe sobre esta parte de América, sobre todo porque nos lleva poco a poco a una separación, en vez de ser un mundo occidental integrado, teniendo en cuenta que en esta América viven más de 300 millones de seres humanos adscritos a ese mundo por su cultura, aspiraciones y formas de vida y con cerca de quinientos años de raíz ibérica.

Nada puede ser más demostrativo de esta situación que las declaraciones que acaban de hacerse después de terminada la entrevista del Presidente de Estados Unidos con el de México, sobre la situación de Centroamérica. Mientras el Presidente Reagan planteaba —(¿alguien se preguntó si estaba presente ahí algún representante de los países afectados?)— “el establecimiento o fortalecimiento de instituciones democráticas en cada país del área”, el Presidente mexicano replicó que su país desea que los pueblos centroamericanos, “hermanos nuestros, sean dueños de su voluntad y sus destinos. Nadie, agregó, puede imponer a los demás su propia imagen ni creer que sus valores y respuestas son los superiores y por ello aplicables a la nación ajena”.

El doloroso conflicto de las Malvinas provocó igualmente un quebrantamiento muy importante en las relaciones entre el mundo europeo occidental y Norteamérica, por un lado, y una vasta proporción de la América Latina, por el otro, significando una alarma sostenida sobre la necesidad de conocer bien nuestra realidad.

Los gobiernos parlamentarios europeos y las grandes corrientes ideológico-políticas que los informan, vale decir, la socialdemocracia, la democracia cristiana, el liberalismo y el socialismo europeo, dieron un sólido respaldo al conservador gobierno inglés, invocando razones de derecho internacional, de defensa atlántica y

de protección a una democracia agredida por una dictadura —según sus expresiones— fascista militarista. Sin embargo, esas corrientes ideológicas no encontraron eco en los países calificados como democráticos —según los moldes europeos— de la América Latina, ni en los partidos políticos que los sustentan. Fue muy significativo que países como Venezuela, Perú y Ecuador, cuyos gobiernos son de algunas de las tendencias indicadas, fueran los líderes de la defensa de la posición argentina, quebrando así todo un esquema de influencias político-intelectuales sobre gobernantes o dirigentes americanos que presumían ejercer los líderes europeos.

Me detengo en estos casos porque son demostrativos de la necesidad de compenetrarse de la realidad de los diferentes países latinoamericanos, terminando con la desinformación o información deformada que los encubre o con el afán de conducir sus procesos según las convicciones del demócrata extranjero que quiere que ellos se comporten y se puedan juzgar, por consiguiente, según la imagen y semejanza de sus propias ideas.

Basta una consideración más para apreciar debidamente este asunto. Como dice un escritor, entre las dos guerras mundiales aparecieron cierto número de monstruos políticos. “Europa *inventó* el stalinismo, el antisemitismo, el exterminio masivo planeado, el franquismo, el nazismo, el fascismo, ¡no es poca cosa! Las principales aberraciones del siglo xx nacieron en Europa. “Podríamos agregar nosotros que ninguna de esas cosas salieron de América”.

Pretender, por eso, juzgar la realidad chilena planteando como punto de partida que aquí estamos dentro de un régimen fascista militarista es revelar una ignorancia supina de nuestra realidad y nuestro medio. En Chile no ha habido, no hay ni habrá fascismo, que es un producto típico europeo. Resulta ridículo atribuir fascismo, que es totalitarismo y estatismo a ultranza (recuérdese la frase de Mussolini: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado”), al gobierno del Presidente Pinochet que está soportando acusaciones internas, en estos momentos, por haber llevado adelante una política de aperturismo, de confianza en la empresa privada, de libre competencia y de “desestatización”, de creer en el papel subsidiario del Estado y de haber promulgado una Constitución que así lo establece, que permite incluso declarar la inconstitucionalidad de los partidos o movimientos totalitarios y que coloca al Estado al servicio del hombre.

Nada puede ser más definitivo, en este aspecto, que recordar que quien intentó fundar un movimiento nazista y ser aprendiz de “fuhrer” en Chile, terminó, comido por nuestro medio, en un liberal, a la vieja ultranza, arrepentido y confeso.

Atribuir militarismo al régimen chileno es, por otra parte, un desconocimiento de nuestra tradición y de nuestra historia. Si bien es cierto que la lucha del araucano contra el conquistador español duró más de trescientos años, siendo de las

guerras más largas de la historia humana, y que ese hecho determinó, en buena parte, la organización administrativa y política de la conquista y de la colonia, no es menos cierto que desde nuestra independencia los militares chilenos fueron determinantes para instaurar el orden portaliano que eliminó toda posibilidad de que surgieran los caudillos militares que afloraron en el resto de América Latina; contribuyeron a defender la política de constitucionalismo y de liberalismo político que surgió de la revolución de 1891; fueron decisivos en las reformas que incorporaron a las clases media y popular en las tareas nacionales y en la aprobación de las leyes que autorizaron la organización sindical y la seguridad social, en 1925; y en 1973 intervinieron, a petición de la inmensa mayoría del país, para poner fin a un régimen que había destruido no sólo el Estado de Derecho, sino que estaba desintegrando totalmente nuestro ser nacional.

Se ha creado la imagen, producto de la mala información que se tiene en el extranjero sobre Chile, que el gobierno de Allende fue un gobierno democrático y constitucional, respetuoso de las leyes y de las libertades, derribado por un golpe militar injustificado. Es la visión maniqueísta de "los malos contra los buenos" más fácil de hacer creer por un mundo informativo manipulado.

Allende sólo obtuvo el 35% de los votos populares en la elección de 1970 y era así evidente que una inmensa mayoría del país no deseaba la imposición de un régimen socialista. No se conocía, por otra parte, el camino que llevara desde sociedades relativamente desarrolladas industrialmente y con alto grado de desarrollo democrático —como era el caso de Chile— hacia el socialismo. Allende, comprometiéndose sólo personalmente, planteó la posibilidad de ser el primero en señalar un proyecto inédito: la vía chilena hacia el socialismo. Improvisador impenitente, creyó posible conciliar toda la cultura y tradición democrática chilena con acciones basadas en la teoría marxista. Sin embargo, había un hecho que hacía inviable el proyecto: los dos partidos marxistas que representaban casi toda la Unidad Popular, no habían aceptado jamás la vía democrática.

El Partido Comunista que operaba y que pretende seguir operando en Chile es absolutamente leal y obsecuente al sistema totalitario soviético. Está adherido de tal manera que no se lo puede entender sino como la expresión del comunismo soviético en Chile. Defendió en su tiempo las invasiones de Hungría y Checoslovaquia; ahora defiende la de Afganistán, junto con la aceptación de la doctrina de la soberanía limitada de Brezhnev y quien fue su jefe se ha declarado en Europa enemigo y denunciador del llamado eurocomunismo.

Por otra parte, el Partido Socialista, al que pertenecía Allende, en un congreso celebrado en noviembre de 1967, rechazaba expresamente la democracia como forma de alcanzar el poder. "La lucha armada —señalaba— es la única vía que

conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento". Nada tiene que ver este Partido con las formas socialistas o socialdemócratas que existen en los países europeos occidentales. Su totalitarismo y el apoyo a la violencia como arma política lo distancian absolutamente de esas organizaciones.

La vía chilena al socialismo falló así por su base. Pronto el país comprobó el sometimiento total de Allende a los dictados de los partidos marxistas y se empezaron a multiplicar las denuncias de que la democracia "burguesa" era una trampa para la aplicación del socialismo. En una entrevista famosa que se publicó el 16 de marzo de 1971 Allende declaraba a Régis Debray de que su compromiso de respetar el Estatuto de Garantías Constitucionales había sido sólo un "paso táctico" para alcanzar el poder.

Se llevó así adelante una acción destinada a cambiar las bases y la faz de la sociedad chilena, mediante la imposición de facto y en forma paralela, desconociendo los caminos constitucionales, de instituciones que dieran acceso con posterioridad a una nueva estructura social propia del totalitarismo marxista. Organismos de base creados *ad hoc* se arrogaron funciones propias de los poderes del Estado, aduciendo la ineficacia de la democracia burguesa. Se plantean una Asamblea Popular para reemplazar el Congreso Nacional, y los tribunales populares para "ayudar" a descongestionar a los Tribunales de Justicia; Juntas de Abastecimientos en cada una de las vecindades para entregar cuotas de los alimentos más indispensables; y sobre todo, sin anunciarlo, un poder popular armado, paralelo a las Fuerzas Armadas y Carabineros, con el pretexto de evitar actos en contra del "compañero Presidente".

Por otra parte, se intervino totalmente la economía, con fraude a la legislación vigente. Así lo señalaron en declaración pública todos los parlamentarios demócratas con fecha 2 de marzo de 1972.

Simultáneamente, el gobierno y los partidos que lo sustentaban desconocían las resoluciones y acuerdos de los poderes legítimos. Las acusaciones constitucionales, y los 8.000 fallos de los tribunales que no se cumplían, las resoluciones de la Contraloría que no se respetaban, como asimismo la autonomía universitaria, culminaron con la negativa de Allende de promulgar la reforma constitucional aprobada legalmente por el Congreso.

Las fuerzas que sustentaron al gobierno entronizaron a la vez la violencia y el terrorismo como métodos políticos, ocupando en ello a los grupos armados que habían formado subrepticamente; transformaron en libertinaje la libertad de expresión tradicionalmente respetada en Chile, convirtiendo en sistema el uso de la injuria y la calumnia en contra de los opositores políticos, obteniendo los autores la impunidad mediante el indulto presidencial; colocaron a las organizaciones sindica-

les y gremios al servicio irrestricto de los partidos de gobierno, desconociendo las directivas elegidas que no les eran adictas.

Finalmente, Chile conoció algo que trastornaba totalmente su esquema jurídico-institucional: el Gobierno no era ya el preservador del orden legal ni el que defendía al país contra la subversión. Por el contrario, desde la estructura gubernativa se alentaba la subversión y la violencia, para producir el caos y obtener de esa manera, el desánimo y la entrega de la población a los dictados de las fuerzas marxistas.

El régimen político establecido en la Constitución de 1925 se manifestó totalmente insuficiente para resistir tales embates.

Se había conseguido la destrucción de la democracia chilena por dos vías: mediante el ataque frontal a su régimen legal y de convivencia humana, por una parte; y, por la otra, mediante la pérdida de fe, por el pueblo chileno, de que la Constitución y la ley fueran instrumentos eficaces para defenderlo.

Cuando el Poder Judicial, primero, a través de la Corte Suprema, y la Cámara de Diputados, después, en agosto de 1973, denunciaban y resolvían la ilegalidad del régimen y del gobierno de Allende, no hacían sino certificar la partida de defunción de una democracia y un Estado de Derecho que habían sido ejemplares en América, destruidos por la acción de los partidos marxistas. ¡Tremenda responsabilidad histórica de quienes pretenden presionar ahora con la solidaridad democrática de Occidente!

Me he detenido largamente en este trazo de nuestra historia porque me preocupa profundamente que se quiera analizar y juzgar nuestra situación solamente por los errores o los defectos del actual régimen chileno y se trate de borrar el pasado y de presionarnos para que aceptemos una simple reconstitución democrática de un régimen que fue incapaz de resistir a sus destructores y con organizaciones que llevan etiquetas cuyos títulos se asemejan sólo en el nombre a ideas y partidos de Europa Occidental que han sabido evolucionar para asimilar la cultura de occidente y la democracia como su más alta expresión política.

3. Otro aspecto que hay que abordar es la superación del esquema gobierno-oposición.

Es cierto que existe una crisis económica generalizada y que urge resolver el problema de la desocupación en el país; pero superponer simplemente a ella el proceso de transición política, valiéndose de la oposición por ese motivo al gobierno, es cargar el futuro político del país de incertidumbres. No hay duda que para la oposición puede ser muy cómodo conservar ese esquema; pero también puede ser un arma de doble filo. Está sucediendo, en muchos casos, que el cambio de régimen

a un gobierno democrático no trae alivio económico y, en algunos, agrava la crisis. Y, por otra parte, el cuadro puede variar si el Gobierno, tomando conciencia de la urgencia que requiere el enfrentamiento de la desocupación, tome medidas que mellen las armas que en este momento tienen los opositores.

El proceso de transición es más trascendente que cualquier posición contingente. Alcanzar la democracia no puede transformarse en una simple lucha por el poder, en tratar de llegar al gobierno, cambiando al gobernante. Conservar este enfoque es aventurar una pérdida para la democracia y para el país.

Se requiere, para esto, un cambio de actitud, tanto por los opositores como por el gobierno.

Me atrevo, al proponerlo, citar, por la claridad de sus conceptos, al constitucionalista don Enrique Evans de la Cuadra, quien en entrevista publicada en "El Mercurio" con fecha 3 de abril del año en curso, se expresaba así: "Yo distingo al disidente del opositor en Chile. El opositor es el que vive y actúa en sus propias capillas, convenciendo a los que ya están convencidos y sin crear realmente campos de apertura y entendimiento con otros sectores de gobierno y, lo que más me molesta, encontrando que todo lo que hace este gobierno es malo. El disidente, en cambio, tiene un criterio más realista. Y más conciliador. Y yo pienso que esa actitud conciliadora es absolutamente indispensable".

"Yo quisiera —prosigue— que se iniciara un proceso integrador de voluntades, de gente de gobierno y de oposición en que se eliminen de partida los calificativos y las descalificaciones. Los opositores no son antipatriotas, ni políticos desplazados ansiosos de poder, ni cúpulas dirigentes sin significación ni influencia nacional. La gente de gobierno —por otra parte—, en general, no son fascistas ni totalitarios. Si el gobierno inicia este proceso integrador con un gesto de grandeza, como sería un regreso masivo de exiliados y si, simultáneamente, hiciera un llamado auténtico a un encuentro de colaboración inicial, y, si, por su parte, la oposición se allana al diálogo con actitud de consenso, se estaría dando un paso fundamental".

Planteadas así las cosas, los agentes de la transición podrían asumir el rol que les corresponde. Se podría igualmente cumplir la idea de separar el régimen del gobierno. Los representantes de éste podrán participar y asegurar la participación de todos —partidarios y disidentes— en la obtención del consenso necesario para ir proporcionando los pasos destinados a regularizar el funcionamiento del sistema democrático. Por su parte, el régimen, personalizado en el Jefe del Estado y en la Junta Militar, podrá arbitrar a través del cumplimiento de las funciones de poderes del Estado que les han sido encomendadas, las medidas que representen la voluntad nacional para ir dando forma a la institucionalidad que haga llegar a la plenitud del ejercicio democrático.

Las Fuerzas Armadas, integrantes también del régimen, podrán asumir el papel de garantes de la transformación institucional, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Por lo demás, justo es reconocer que por acción del Presidente Pinochet ellas se han mantenido al margen del partidismo y de la contingencia política, conservando su institucionalidad y profesionalismo, siendo, por eso mismo, un factor importante en la posibilidad del consenso nacional en las tareas de la transición.

Si hemos recordado la historia política del país en estos últimos años, es para no olvidar que la inmensa mayoría ciudadana, incluso sectores que hoy conforman la oposición, fueron partidarios del pronunciamiento militar de 1973 y han expresado su conformidad con la acción de las Fuerzas Armadas en este acto. Esto impone una mutua solidaridad para hacer posible la transición a la democracia.

4. Es preciso referirse también a quienes pueden participar en este proceso de democratización en nuestro país.

Los últimos acontecimientos han dado preeminencia a las actuaciones de la llamada clase política que, en buena parte, procede del régimen político que tuvo vigencia hasta 1973. La aparente, como se ha dicho, falta de voluntad sostenida para llevar adelante las medidas conducentes a hacer efectiva la transición han hecho tomar la iniciativa a los que se han constituido en un frente llamado opositor.

Este hecho nos plantea varios problemas que es preciso analizar y tratar de dilucidar.

En primer lugar, debemos decir que es muy difícil precisar en este momento cuál es la representatividad de cada cual en el ambiente nacional. Pretender, como se ha publicado, que por el solo hecho de estar planteando una oposición a ultranza cargando el acento en hechos y en el aprovechamiento de una crisis económica que afecta a vastísimos sectores de nuestro país, atribuirse el 70% de los ciudadanos chilenos es, más que aventurado, poco eficiente para los altos fines que pretende el país. Me explico.

Si esos vastos sectores afectados por la crisis empiezan a encontrar soluciones por la acción del gobierno a sus problemas específicos, no todos —llámense gremios o personas— querrán verse representados por las etiquetas políticas de quienes, en este instante, se atribuyen su presentación. ¡Qué duramente se tiene que pagar entonces la equivocación de quienes pensaron que sus partidos eran los únicos que estaban en escena porque sólo ellos hablaban! Pero en este caso se corre el grave riesgo de perjudicar a la causa democrática por la disminución de ambiente y de fuerzas de quienes se creyeron únicos representantes de la democratización.

Pensemos las cosas de otra manera y tratemos de llegar a la realidad que vive

nuestro país. Más de una vez he dicho que lo peor que puede pasarle a un político es imaginar una realidad y no ajustarse a los hechos, confundir los deseos con la realidad.

Es un hecho no controvertido que en el punto más álgido del régimen político de la Constitución de 1925, los partidos, que tenían el monopolio de la representación de la opinión pública en materia electoral, no tenían, en su conjunto, entre sus militantes, más del 10% de la masa electoral del país.

Pensemos, por otra parte, que desde hace diez años existe un receso partidista en el país y que, por una serie de circunstancias, se transformó en un receso político. La exposición y el debate de las ideas políticas fueron reemplazados por el debate económico; durante este último tiempo han hablado solamente los economistas, dando la imagen que se habría producido un cambio en la dirigencia del país del futuro, lo que se ha frustrado con los profundos efectos que tiene en Chile la crisis económica que afrontamos.

Hay toda una generación en el país que no sólo no tiene una práctica electoral, sino tampoco un ejercicio de la democracia y ni siquiera la valoración de las ideas políticas. ¿Qué piensan los integrantes de esa generación sobre la idea de reconstituir rápidamente una democracia sobre la única base de un régimen que feneció y con fórmulas e ideas políticas que imperaron en ese pasado? Recordemos también, a este respecto, que Chile ha tenido el raro privilegio de probar, en el pasado, todas las recetas políticas y partidistas y nadie, en este instante, de los que actuamos en ese pasado puede tirar la primera piedra considerándose libre de pecado.

Dilucidemos igualmente la pretensión de que participen en este proceso quienes fueron los destructores de nuestra democracia. ¿Qué pueden aportar los que no han variado un ápice sus criterios y sus dogmas, los que no creen ni han creído jamás en ella? No quisiera recordar credulidades pasadas sobre propósitos que costaron tanto al país, sino que decir que esa participación no significaría sino espíritu revanchista, falta de apoyo, hostigamiento, exigencia y desgaste para los mismos conciliadores que patrocinaron su presencia, dando así pretexto a los inmovilistas. ¡No caigamos en esta trampa!

Recordemos que el exclusivismo para conducir el proceso desde un punto de vista partidario produce efectos increíblemente desgastadores y perjudiciales para la fuerza que quiere atribuirse la representación de la mayoría. El Partido de Centro, de España, atribuyéndose en forma exclusiva la conducción de la transición —tratando de destruir el pasado inmediato y pretendiendo una imagen de ruptura con el régimen de que provenían la mayoría de sus dirigentes—, terminó por tener que entregar el poder al socialismo y no sólo eso, llegó a su propia disolución.

Todos estos antecedentes son necesarios para la determinación de la participación que resulte eficaz y cooperadora para la buena marcha del proceso.

Finalmente, manifiesto que debe evitarse a toda costa que la etapa de tránsito a la democracia se transforme en un debilitamiento continuo de la autoridad, hasta hacer creer o provocar la imagen de que la democracia es sinónimo de anarquía o de caos.

Ese es el camino más adecuado, como tanto ejemplos tenemos a la vista, para que aparezca el energúmeno incendiario junto al demagogo mitinesco o el terrorista, con sus modernas metralletas o bombas. Para eso se requiere que los moderados por naturaleza, y en Chile son la inmensa mayoría, no jueguen a revolucionarios, aunque por los años que han pasado, les duelan las articulaciones al hacerlo.

Esta no es sólo una tarea para el gobierno, sino de todos, porque ella incide en la modelación del Estado del futuro, que debe protegernos y defender todo aquello que nos es común.

Hay que tener cuidado con los que quieren darse un empacho de democracia. Como dice un autor, "los ingleses, que algo saben de democracia, la han tomado siempre como toman sus comidas: poco muchas veces, no todo de una vez. No se pasa hambre y no hay peligro de indigestión".

He esbozado los puntos anteriores que no he querido que sean definiciones *a priori* sobre los proyectos concretos que deben conocerse y despacharse en este período. Me ha parecido que esas definiciones anticipadas pueden ser perturbadoras para encontrar los caminos del entendimiento. Son más bien reflexiones sobre las *actitudes* que deben adoptarse para poder entrar de lleno a la transición a la democracia.

Todo nos obliga, incluso la sangre derramada, a tener actitudes de apertura, de conciliación y, sobre todo, de humildad en estos momentos. No sólo se debe pedir apertura al Gobierno, sino el ánimo de los que la piden debe ser también abierto, abandonando todo dogmatismo doctrinario o partidista, renunciando al todo o nada que, las más de las veces, conduce a la nada.

Termino con unas palabras de García Escudero, cuando reflexionaba sobre el proceso español: "Veo que hay quienes levantan la cabeza y piden cuentas, y yo me pregunto quiénes las piden y en nombre de qué. Se diría que sólo el Gobierno tiene que convencer a los demás; pero que nadie tiene que convencer al Gobierno. ¿Qué pasado intachable puede alguien presentar aquí? ¿Y qué pruebas de enmienda? Hablamos todos de democracia. ¿Cuántos entienden que la democracia no es tanto exigir como exigirse, no tanto responsabilizar como responsabilizarse?"